



Desafíos y escenarios para la política exterior colombiana en un contexto de posconflicto

Por: Eduardo Pastrana* y Rafael Castro**

[*] **Eduardo Pastrana:** Profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (PUJ), y director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Leipzig. Correo: epastrana@javeriana.edu.co

[**] **Rafael Castro:** Profesor Instructor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Magíster en Relaciones Internacionales de la misma Universidad. Abogado de la Universidad Santiago de Cali. Correo: rafeca1318@gmail.com

Política Exterior Colombiana (PEC) y Securitización

La idea de la “securitización” parte del hecho de que las amenazas y vulnerabilidades pueden originarse en asuntos militares y no militares; sin embargo, lo que los transforma en “problemas de seguridad” es que se definen explícitamente como amenazas a la existencia de un objeto referente (región, Estado, comunidad, individuo, etc.) por parte de un agente *securitizador* o que tiene la capacidad de adoptar medidas de emergencia o excepcionales (usualmente coercitivas), alterando o cambiando las reglas que las restringían (Buzan, Weaever, de Wilde, 1998, en Hough, 2004, p.18). En tal sentido, varios gobiernos colombianos, definieron el problema del narcotráfico y el de la insurgencia como amenazas a la seguridad nacional con la consecuente proyección de sus efectos en el ámbito regional.

Aunque la Seguridad Nacional debería constituirse como el conjunto de medidas y estrategias de carácter civil-gubernamental encaminadas a garantizar la seguridad interior -seguridad pública- y a propender por la seguridad humana, a la postre se impusieron criterios de doctrina de defensa al interior del territorio colombiano, tales como” la preparación

y mentalización para *eliminar* al enemigo” (Tibiletti, 2001; Saint-Pierre, 2012, p.43). Esto implicó que la política exterior “se instrumentalizara, sobre todo en el gobierno Uribe, para adquirir ventajas sobre el enemigo interno y robustecer la doctrina de seguridad” (Flemes, 2012, p.31-32). Asimismo, se buscaba instrumentalizar a los organismos multilaterales para acorralar políticamente al enemigo interno y con el tiempo adelantar una “cruzada” diplomática contra la presunta tolerancia y/o cooperación de algunos gobiernos vecinos con las FARC (Pastrana y Vera, 2012a, p.65).

Históricamente, los Gobiernos de los presidentes Vigilio Barco (1986-1990) y Cesar Gaviria (1990-1994) y, paradójicamente, Ernesto Samper (1994-1998) serían los que pavimentarían la senda hacia lo que varios analistas calificaron como la “narcotización” de la política exterior y el alineamiento definitivo de Colombia en la lógica de la “Guerra mundial contra las Drogas” liderada por EE.UU (Tokatlian, 1999; Cardona, 2001). En ese orden de ideas, durante los Gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) a través del “Plan Colombia” y Álvaro Uribe (2002-2010) mediante el “Plan Patriota” (estrategia militar enmarcada en su plan de Gobierno denominado Política de Seguridad Democrática) se profundizaron la securitización y



despolitización del conflicto armado interno. Ambas estrategias generaron consecuencias muy negativas para la política exterior.

De allí que Tickner (2004) sugiera que “la securitización interna consistió en la militarización de la seguridad y en la adopción de poderes y medidas excepcionales por parte de las élites” (p. 14). La securitización externa consistió en la percepción negativa de los vecinos contra el combate frontal en Colombia y contra la presencia creciente de EE.UU. en la sub-región andina, lo que sumado a las posturas ideologizadas de los gobiernos “de izquierda”, llevó a presidentes como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia a ‘identificar el “Plan Colombia” como una “amenaza” y a Brasil a auto-protegerse en su frontera y a sospechar de la eventual incursión de una “potencia extra-regional” en su Amazonía’ (Tickner, 2004, p.24-25). Básicamente, fueron reacciones a la fuerte presencia de EE.UU. en la sub-región andina, la cual empezó a fundirse con los patrones locales de inter-relación en seguridad haciendo difíciles las dinámicas autónomas de cooperación entre vecinos (Tickner, 2004).

Además, la compenetración de los grupos armados y el mercado ilegal de las drogas, aunado a un abandono histórico del Estado en varias regiones, se tradujo en la pérdida de control fáctico de varias porciones del territorio colombiano, unas dominadas por las AUC (grupos paramilitares denominados Autodefensas Unidas de Colombia) y otras por las guerrillas de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Al identificar esta ecuación, académicos como Tokatlán (2008) y Borda (2007) explican que los gobiernos Pastrana y Uribe fueron particularmente hábiles para hiperbolizar esta situación en su diplomacia, al enfatizar que el “narcoterrorismo” - FARC, ELN, AUC - era la peor amenaza que enfrentaba la democracia colombiana, y que sin apoyo externo, el país prácticamente era un “Estado fallido”. Por tanto, la estrategia de *internacionalización del conflicto* consistió en una decisión “explícita y consciente” del Gobierno colombiano para involucrar a los Estados Unidos. Tal decisión de las élites se produjo no sólo para mantenerse en el poder y recuperar asimetría

a favor del Estado frente a los grupos armados ilegales, reduciendo los propios costos y la duración de ese conflicto, sino que además fue propiciada por “la “empatía” que éstas tienen con sus homólogos norteamericanos y por la percepción de similitudes culturales o institucionales entre las partes” (Borda, 2007, pp. 74-77).

En dicho contexto, Pastrana y Uribe implementaron una diplomacia para la guerra con la intención de implicar directamente a los EE.UU. como “aliado”, ya fuera el “narcoterrorismo” - en Pastrana - o el “terrorismo” - en Uribe - el enemigo interno con alcance internacional a neutralizar. La nefasta coyuntura de los ataques del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al-Qaeda y la reacción bélica “global” de la administración de George Bush Jr. en la llamada “Guerra contra el Terrorismo” (WOT) constituyeron una ventana de oportunidad para que ambos gobiernos “insertaran sus intereses en la agenda de seguridad nacional de EE.UU” (Borda, 2007, p.78).

En este orden de ideas, Colombia priorizó en la década pasada su relación con los EE.UU., manteniendo un esquema de *réspice polum* (mirar a la estrella del norte) ⁴. Así las cosas, la agenda internacional de Colombia, durante la era de Álvaro Uribe se *securitizó* extremadamente y se plegó al *discurso antiterrorista* como recurso casi único en el ámbito temático, y se *concentró* y *bilateralizó* extremadamente en los EE.UU. desde un punto de vista geográfico. En consecuencia, ni Latinoamérica, ni Europa, ni Asia y, mucho menos, África, merecieron la atención que pudieron tener. Por tanto, “se produjo una “*securitización*” y posteriormente una “*terrorización*” de la agenda internacional colombiana” (Pastrana, 2011, pp. 75-78).

Ya sea que se entienda como una “*intervención por invitación*” (Tickner, 2007) o como una “*internacionalización*” política y consciente del conflicto armado interno (Borda, 2007) por parte de Pastrana y Uribe, ambos presidentes lograron con

⁴ Esta resulta más una preferencia geopolítica que una doctrina precisa de política exterior, pero que desde que la acuñara Marco Fidel Suárez, determinaría la mirada colombiana de buena parte del siglo XX (Vázquez, 1996; González, 2004).



la ayuda de EE.UU. recuperar asimetría a favor de la Fuerza Pública. frente a los grupos armados ilegales, disminuir costos en el proceso de modernización del sector defensa y “convencer al Congreso estadounidense de eliminar la restricción del uso de la ayuda financiera antidrogas para operaciones de contrainsurgencia” (Tickner, 2007, p.102-103). Ese *back-up* de EE.UU. significó que Colombia se convirtiera “a mediados de los 2000 en el quinto mayor receptor de ayuda económica y militar de la superpotencia en el mundo, después de Irak, Afganistán, Israel y Egipto” (Tokatlián, 2008, p.99) ⁵.

La forma de despliegue del “Plan Patriota” -la estrategia militar de Uribe en el marco de su Política de Seguridad Democrática (PSD)- agudizó los *spill overs* hacia las periferias y las fronteras, “empujando” a las FARC hacia Venezuela, Perú y Ecuador ⁶. También supuso el repudio y la desconfianza del vecindario, reflejado en las posturas colectivas en OEA y UNASUR. Aunque Brasil firmó varios acuerdos de cooperación en seguridad y accedió (a regañadientes) en la era Lula da Silva a calificar a las FARC como “terroristas”, fue evidente su malestar por las actitudes belicistas de Uribe y por la posibilidad de aumentar el número de bases colombianas usadas por soldados y contratistas de EE.UU. En síntesis, Colombia terminó esencialmente aislada respecto a su región inmediata, con la impugnación colectiva en UNASUR y con un EE.UU. que menguó su apoyo a la PSD y luego arreció en críticas por DDHH con el avance electoral de los demócratas en el Congreso hacia 2008.

En contraste con su antecesor, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (desde 2010 en el cargo), le dio un giro a la PEC, cuyo objetivo estratégico ha apuntado a una diversificación geográfica y temática. Se ha evidenciado el tránsito de la doctrina

respice polum al enfoque *respice omnia u orbis* (mirar al mundo o al conjunto) que ha ampliado el espectro del relacionamiento internacional de Colombia y, sobre todo, “permitió reconstruir las relaciones con los Estados latinoamericanos” (Pastrana y Vera, 2012b, p.191). Por ello, una de las prioridades del Gobierno Santos fue la de restablecer y normalizar las relaciones de Colombia con dos de sus vecinos más afectados por el desbordamiento transfronterizo del conflicto: Venezuela y Ecuador. Pero también, desde el inicio de su administración:

Hizo público su reconocimiento de un conflicto armado interno de baja intensidad, buscando el compromiso pleno de las FF.AA. con el DIH y pensando en ir creando la base internacional de legitimidad del proceso de paz (Borda, 2014, p.35).

En suma, el narcotráfico, el conflicto armado interno y la consecuente búsqueda de la paz han influido constantemente en la agenda de política exterior colombiana. Por ello, es necesario reflexionar sobre el papel que la política exterior colombiana ha desempeñado como catalizador del proceso de paz. De igual forma, teniendo en cuenta la que los factores domésticos ligados al conflicto y a la búsqueda de la paz han influenciado la política exterior colombiana, también es importante analizar los posibles impactos y escenarios regionales y globales que pueden generar los avances y retrocesos de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia en una etapa de posconflicto.

La proyección de Colombia en los escenarios globales

Desde la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos, la política exterior colombiana ha procurado construir la imagen del Estado colombiano como mucho más autónomo, activo y propositivo en los escenarios globales, y ya no como un ‘país problema’ para la comunidad internacional. Hay cuatro elementos claves para comprender esa estrategia (Pastrana y Gehring, 2017)

⁵ Colombia alcanzó a recibir un tope histórico de ayuda militar de 773.544.515 USD para 2001, de ayuda económica de aproximadamente 250.000.000 USD en 2008-2009, y construir un pie de fuerza de más de 450.000 efectivos, la segunda tropa en tamaño en América Latina después de Brasil con alrededor de 713.000

⁶ La guerra contribuyó al desplazamiento forzado transfronterizo y afectó con el glifosato (Roundup de Monsanto) los cultivos, fuentes de agua y personas de las poblaciones vecinas. El hito exterior más problemático, fue el efecto político y diplomático perverso que dejó el bombardeo y traspaso por parte de tropas de Colombia hacia territorio ecuatoriano en la denominada “Operación Fénix” en marzo de 2008, la cual culminó con la muerte de alias “Raúl Reyes” (FARC).



En primer lugar, la clasificación del país como de renta media-alta en 2010, en la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo que elaboran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM). Lo cual tiene como su principal implicación que el Estado colombiano ya no se encuentra en la lista de receptores prioritarios de ayuda al desarrollo.

En segundo lugar, uno de los propósitos del gobierno Santos ha sido mostrar que el Estado tiene las capacidades financieras e institucionales para cumplir con sus funciones esenciales. Si bien esto no es óbice para continuar recibiendo el apoyo de las instituciones internacionales, y de socios estratégicos, especialmente de cara a un escenario de posconflicto y a una difícil situación económica interna⁷.

Como tercer punto, es importante destacar que se ha procurado fortalecer el rol del país como ‘oferente’ de cooperación, considerando que tiene un *know-how* importante en cuestiones de seguridad como la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Esa oferta se ha brindado de manera más amplia a los países del Triángulo del Norte Centroamericano y a México, principalmente por medio de la figura de la cooperación triangular junto a EE.UU., así como a países africanos, caribeños y suramericanos (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.).

Cuarto, “el Estado colombiano desea mostrarse más activo y colaborativo a través del envío de ayuda humanitaria en situaciones de catástrofes naturales como en el caso de Haití en 2010, de Nepal en 2015, y de Ecuador en 2016” (Gehring y Cuervo, 2015, p. 655).

Por otro lado, hay tres escenarios fundamentales en los que busca desplegarse ese rol más propositivo de la política exterior colombiana, a saber: en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la OCDE (Castro y González, 2015). En cuanto a la primera, Colombia viene gestando, junto a México y Guatemala, que se genere un debate en el seno de

la ONU sobre el enfoque de lucha contra las drogas, para dar paso a uno con mayor énfasis en la salud pública y el respeto a los DD.HH. Uno de los objetivos alcanzados en ese sentido fue haber logrado que se adelantara la sesión especial de la Asamblea General sobre drogas (UNGASS por sus siglas en inglés).

En dicho contexto, Colombia también propuso los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la reunión de Río+20 en 2012, y participó activamente con propuestas formuladas en encuentros Gobierno-Sociedad Civil-Sistema de Naciones Unidas durante 2013. A su vez, es importante destacar el acuerdo que se firmó en Enero de 2015 entre Colombia y la ONU, para que el país contribuya con personal policial y militar a las misiones de paz con hasta 5000 efectivos. Lo anterior, aprovechando asimismo el *know-how* derivado del conflicto armado, en cuestiones como operaciones especiales, y dentro del contexto de transformación de los roles de las Fuerzas Armadas en un escenario de posconflicto.

En este orden de ideas, el Estado colombiano suscribió en 2013 un acuerdo de cooperación e intercambio de información con la OTAN, y el 24 de diciembre de 2016, el presidente Santos señaló que tal organización aceptó comenzar conversaciones para realizar un programa de cooperación en cuestiones de lucha contra el crimen organizado, ciberseguridad, seguridad de la información y el intercambio de información (Globovisión, 2016). Sobre el acuerdo se ha subrayado que es el primero de este tipo que se firma con un país latinoamericano.

El tercer escenario en que Colombia quiere proyectarse como más autónomo y estable es la OCDE, por lo que se encuentra en proceso de adhesión a la misma. De su membresía espera aprovechar las lecciones económicas de los países desarrollados y, desde una perspectiva estratégica, que la misma ayude a fortalecer su imagen como un socio comercial confiable y un destino atractivo para la inversión extranjera.

La pertenencia a ‘las grandes ligas’, o mejor, la cercanía a los países del norte también ha estado encaminada a permitirle al país convertirse en un

⁷ Derivada del bajo crecimiento asociado a la caída de los precios del petróleo y de las materias primas, así como a la reducción de las compras chinas.



miembro atractivo para los mega-bloques comerciales al estilo del *Trans-Pacific Partnership* (TPP) o del *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Así pues, la construcción de una paz estable y duradera, puede contribuir a que el Estado colombiano cumpla con su objetivo de mostrarse como un país mucho más estable, y una proyección más autónoma, activa y propositiva a que pueda jugar un mayor papel en los escenarios de gobernanza global e insertarse en las más importantes negociaciones comerciales; al tiempo que todo esto contribuye al objetivo de tener una imagen de ser un buen destino para las inversiones y un excelente socio comercial.

Las potencias extra-regionales y el posconflicto en Colombia

Las potencias extra-regionales han tenido diversos involucramientos en las negociaciones de paz en Colombia y puede esperarse también una participación significativa en un escenario de posconflicto. Así, es relevante examinar el apoyo que han tenido a este respecto EE.UU. y la UE.

Como se mostró en el primer apartado, la participación de EE.UU. en el conflicto colombiano tuvo unas importantes repercusiones para el desarrollo del mismo, principalmente a partir de la aprobación del Plan Colombia. Con la coincidencia de Santos y Obama en el poder, se logró brindar un apoyo al proceso de paz. Aunque EE.UU. no tuvo un rol tan directo como el de los países garantes, sí dispuso un enviado especial para las negociaciones a partir de 2015, Bernie Aronson, y previamente en 2014 el exsecretario de Estado John Kerry había hecho una visita llamando a apoyar las negociaciones. Un punto de interés clave del acuerdo para los EE.UU. es el que se firmó en torno al tema del narcotráfico, que ha sido una de las razones más importantes para las ayudas que le ha dado la potencia del norte al país. Además, teniendo en cuenta que Trump la ha catalogado como una de sus prioridades de gobierno, es probable que este sea un tema fundamental

de la agenda bilateral. Precisamente, éste fue el punto de principal preocupación para el presidente estadounidense durante la reunión que sostuvo con el presidente Santos durante su visita a la Casa Blanca el 18 de mayo de 2017. A su vez, Trump destacó el difícil, pero “fantástico trabajo” que hizo Santos para alcanzar la paz en Colombia (The WhiteHouse, 2017). Previamente, el presidente estadounidense había felicitado telefónicamente a Santos por la obtención del nobel, y ratificado el apoyo al proceso de paz previamente declarado por el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y el vicepresidente, Mike Pence (El Tiempo, 2017).

Así mismo, el expresidente Barack Obama prometió un paquete de ayudas denominado “Paz Colombia”, que consta de US\$ 450 millones y que debe ser destinado, prioritariamente, a la reinserción de los combatientes, al desminado y a la asistencia humanitaria (Pastrana y Gehring, 2017, p. 41), el cual fue aprobado por el Congreso estadounidense, donde el acuerdo de paz goza de gran legitimidad y apoyo por parte del partido Demócrata y el Republicano. Sin embargo, existe cierta preocupación con respecto a los recursos que se asignarán para 2018, teniendo en cuenta que Trump planea disminuir un 31% del presupuesto para ayuda externa que se brinda a través del Departamento de Estado (Las Voces del Mundo, 2017).

Por otro lado, las relaciones con la Unión Europea (UE) también tendrán un papel fundamental. La UE ha contribuido desde hace décadas a la búsqueda de la paz en Colombia, con un enfoque más civilista en contraste con el enfoque militarista de EE.UU. Lo cual llevó a un cierto distanciamiento de la UE de los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) que también privilegiaron esta perspectiva, pero no condujo a la suspensión de los proyectos de construcción de paz que venían impulsando en diversas regiones del país. Dichos proyectos, con la respectiva asistencia técnica y financiera, se han enfocado principalmente en temas de construcción de una cultura de paz, el fomento de la gobernabilidad democrática, y la promoción del desarrollo sostenible.



Durante el Gobierno Santos, y dado el inicio de las negociaciones de paz, se dio una mejora en este aspecto de las relaciones, que se vio reflejado en el nombramiento de un enviado especial para el proceso, Eamon Gilmore, en 2015. A la vez que la alta representante de la UE, Federica Mogherini, anunció un apoyo al posconflicto de 575 millones de euros. Además, la UE “fue el líder en la apertura de un fondo multidonante en el marco del Banco Mundial para recibir los diversos aportes que lleguen a Colombia para hacer frente a los retos de dicho escenario [de posconflicto.” (Pastrana y Gehring, 2015, p. 43). También se debe subrayar que, de manera bilateral, miembros importantes de la UE como Alemania, Francia y España se han comprometido a apoyar temas específicos de la agenda como la justicia, la agricultura familiar y la verificación de la implementación de los acuerdos, respectivamente. Del mismo modo, se han comprometido a apoyar política y financieramente el posconflicto Suecia, Bélgica y Holanda.

Además de estos socios tradicionales, y en concordancia con la proyección a Asia que se viene realizando, Colombia ha recibido apoyo de países como Corea del Sur, Japón y China. El primero planea empezar un programa de apoyo a los desplazados por la violencia (Rodríguez, 2016), el segundo ha donado US\$11,5 millones para el desminado entre dinero, maquinaria y asistencia técnica, y ha propuesto al Estado colombiano la posibilidad de obtener préstamos a tasas inferiores al 1% para la financiación del posconflicto (Lozano, 2016). China, por su parte, ha anunciado la donación de 8 millones de dólares para el posconflicto, y ha manifestado su intención de apoyar desde su propia experiencia el proceso colombiano (RCN, 2015).

Los países asiáticos mencionados, entre otros, pueden ser fundamentales no sólo para los proyectos directamente vinculados al posconflicto, sino también para incrementar los intercambios en cooperación que se vienen gestando con cada uno. Adicionalmente, pueden apoyar con sus inversiones y el comercio bilateral la reactivación económica del Estado colombiano, por cuenta del TLC ya vigente con Corea del Sur, del *Economic Partnership Agreement* (EPA)

que se está negociando con Japón, y de un posible acuerdo de libre comercio que se estaría gestando con China. Sin embargo, este último punto también plantea desafíos, dado que el alto valor agregado y la tecnología que incluyen las exportaciones de estos países acentúan la re-primarización de la economía colombiana. Situación que se viene observando también en otros Estados latinoamericanos (Pastrana, Castro y González, 2017).

Escenarios, socios y retos regionales para la política exterior colombiana en el posconflicto

De cara a un escenario de posconflicto, es importante destacar los impactos que puede tener el mismo en las relaciones con tres vecinos: *Venezuela, Brasil y Ecuador*. Como se destacó en el primer apartado, el efecto de *spill-over* del conflicto y las constantes confrontaciones durante el gobierno de Uribe, generaron un clima tenso para tales relaciones externas. El cual fue mejorado con la llegada de la más pragmática diplomacia de Santos en 2010.

A pesar de la mejora en las *relaciones colombo-venezolanas* a comienzos del Gobierno Santos, a medida que avanza la implementación de los acuerdos de paz y empeora la crisis política y económica en Venezuela, las relaciones con este país vienen desmejorando notablemente. Un elemento importante que considerar es que Colombia había evitado pronunciarse sobre las cuestiones internas venezolanas y de otros países, dada la necesidad que tenía de apoyos internacionales para el proceso de paz. Una vez que concluido, el Gobierno colombiano ya no se encuentra limitado por la posibilidad de perder el apoyo venezolano y viene, en consecuencia, endureciendo su discurso con respecto a la situación de dicho país, y se ha sumado a las presiones internacionales que lidera en el hemisferio el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Además, el gobierno de Nicolás Maduro viene impulsando acciones que han deteriorado las relaciones con Colombia desde hace varios años.



En especial, debido las acusaciones que ha lanzado sobre los planes de desestabilización de su mandato que supuestamente vienen orquestados desde Colombia, con el cierre unilateral de las fronteras, a través de violación de la soberanía por parte de las Fuerzas Militares venezolanas, y con la expulsión masiva de colombianos que vivían en Venezuela en 2015, actos que violaron flagrantemente el derecho internacional.

La situación descrita presenta numerosos retos para Colombia de cara a un escenario de posconflicto. Primero, dificulta la cooperación binacional en las zonas fronterizas para enfrentar problemas como la falta de presencia estatal, que históricamente ha llevado a la proliferación de actividades ilícitas como el contrabando. Segundo, plantea un desafío para combatir conjuntamente las organizaciones criminales que buscarán asumir las rutas del narcotráfico que dejarán grupos como las FARC, y que están emergiendo con mayor fuerza desde el problemático proceso de desmovilización de los paramilitares llevado a cabo durante los mandatos de Uribe. Por tanto, este escenario representa un reto a la consolidación de la seguridad en el territorio nacional. Tercero, la crisis venezolana está generando amplias migraciones hacia el territorio colombiano, que el Estado colombiano no se encuentra preparado para asimilar apropiadamente y que, por ende, pueden conducir a una crisis humanitaria de carácter general. En una cifra histórica, entre 2014 y Enero de 2017 han ingresado 1.046.708 venezolanos y se han deportado 2.387 (El Tiempo, 2017).

De acuerdo con lo expuesto, el desenlace que tenga la situación venezolana tendrá un impacto significativo en las relaciones diplomáticas, en la capacidad de enfrentar los retos compartidos, especialmente los fronterizos; y, por supuesto, en la situación migratoria de los colombianos en Venezuela y de los venezolanos que están llegando de manera creciente a Colombia.

Con la nueva política exterior colombiana, también han mejorado las relaciones con Ecuador. Correa apoyó de manera decidida el proceso de paz entre el

Gobierno colombiano y las FARC, y acogió los diálogos preliminares con el ELN y, desde comienzos de 2017, la mesa de negociación con este grupo guerrillero. Todos esos elementos han generado un buen clima para las relaciones bilaterales, y se espera que continúen de forma positiva en ese aspecto con el apoyo que ha manifestado al proceso de paz el recién electo presidente Lenin Moreno, (Europa Press, 2017).

Ahora bien, el gobierno ecuatoriano viene expresando preocupación ante la posibilidad de que los miembros de las FARC que no participen del proceso de paz pasen a engrosar las filas de las organizaciones criminales que tienen presencia en la frontera compartida. A ese respecto, se genera el desafío de trabajar conjuntamente para combatir este tipo de grupos. En ese sentido, el gobierno ecuatoriano ha declarado que espera un incremento del pie de fuerza por parte del Estado colombiano en esos territorios. Asimismo, se hace necesario brindar apoyo estatal a las comunidades que han sufrido la violencia generada por el conflicto y la delincuencia en esas zonas. Aquí pueden destacarse las tres acciones cívicas binacionales que se desplegaron en 2015 para llevar servicios médicos a tales comunidades a ambos lados de la frontera. Aparte de estos temas, los que se proyectan para los próximos años son los que ya han sido discutidos entre estos gobiernos, a saber: infraestructura, desarrollo sostenible con equidad, integración económica, y con un lugar especial: seguridad (Márquez, 2015, p. 561).

En tercer lugar, para la Colombia del posacuerdo Brasil es un socio muy importante. Desde el comienzo de los diálogos de paz con las FARC, y ahora con los del ELN, ha brindado un apoyo decidido. Lo cual se ha visto traducido no sólo en elementos retóricos sino también en cooperación técnica en diversas áreas como el desminado y la agricultura familiar. Además, en los últimos años se han suscrito un buen número de convenios de cooperación en áreas como educación, ciencia, tecnología, inversiones, entre otros. Del mismo modo que con Venezuela y Ecuador, la frontera se convierte en un escenario clave a abordar tanto por las cuestiones vinculadas a la seguridad para combatir fenómenos como la minería ilegal y el narcotráfico,



como por el cuidado de las comunidades que viven en la misma. En ese punto coordinar acciones y políticas a través de mecanismos como la Comisión Binacional de Frontera (COMBIFRON) puede contribuir a incrementar la presencia del Estado y, por tanto, el imperio de la ley, así como bienes públicos básicos para la población. Es importante tener en cuenta que debido a que esta zona es principalmente selvática se hace todavía más difícil su control, y por ende resulta todavía aún más necesaria una estrecha cooperación (Pastrana y Vera, 2013; Pedroso y Souza, 2015).

Por ende, *la estrategia de diversificación geográfica y temática*, no solamente ha buscado mejorar las relaciones con los países de la región a nivel bilateral, sino que a su vez ha implicado una mayor participación en las instituciones regionales como la UNASUR, la CELAC y la Alianza del Pacífico (AP). Sin descuidar el escenario hemisférico por excelencia: la OEA.

En ese contexto, el país participó de manera mucho más amplia en la Unión de Naciones Suramericanas, por ejemplo, al lograr la Secretaría General primero de forma compartida con Venezuela, y actualmente con el expresidente colombiano Ernesto Samper. Asimismo, por medio de la propuesta de iniciativas como la creación del Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y coordinación de acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Betancourt, 2015). No obstante, a raíz de la crisis fronteriza de 2015 con Venezuela, se mostró que el Estado colombiano no ve a la UNASUR como el organismo regional ideal para la gestión de crisis interestatales, pues prefirió llevar esta problemática ante la OEA. A pesar de eso, en esta última no obtuvo los votos necesarios para que se discutiera la cuestión, y finalmente fue Correa en su calidad de presidente *pro-témpace* de la CELAC quien se encargó de gestar el escenario de encuentro entre Santos y Maduro.

Con relación a lo anterior, hubo diversas críticas de los sectores políticos, especialmente de extrema derecha, en Colombia hacia la inactividad de la UNASUR durante la crisis, con algunos de ellos incluso pidiendo que se diera la salida del país de

la organización suramericana. Por otro lado, a pesar de que se había sugerido la posibilidad de que la UNASUR participara en el proceso de verificación de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, finalmente se pactó que serían únicamente la Organización de las Naciones Unidas y la CELAC, las encargadas de ese proceso.

En cuanto a los aspectos económicos y comerciales de su proyección exterior, el Estado colombiano ha priorizado a nivel regional su participación en la Alianza del Pacífico (AP) junto a México, Chile y Perú. Por medio de tal organización, los Estados miembros buscan afianzar su inserción económica internacional, con especial énfasis en el Asia Pacífico. También esperan hacerse más interesantes como una zona de libre comercio y con buen ambiente para las inversiones, así como por medio de facilidades para el tránsito de bienes, capitales, servicios y personas. Buscan, asimismo, ser un destino turístico más atractivo para la comunidad internacional, y construir cadenas de valor regionales que les permitan diversificar sus canastas exportadoras a los mercados asiáticos (Pastrana, Betancourt y Castro, 2014, pp. 187-188).

Además, en un contexto en que EE.UU. parece inclinarse hacia el proteccionismo, en especial a raíz de la retirada del TPP, la AP puede convertirse en uno de los ejes articuladores de las diversas iniciativas comerciales que se están llevando a cabo en la región latinoamericana y asiática. En concordancia con ese punto, el giro a la derecha que se está llevando a cabo en Suramérica permite pensar en una convergencia en torno al libre comercio de la AP con bloques como el MERCOSUR. Frente a la que se han mostrado favorables Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Dinatale, 2016), y que se ve facilitada por la suspensión de Venezuela del MERCOSUR (Rodríguez, 2017). Aunado a ello, la AP está liderando la aproximación con China, Corea del Sur y los miembros del TPP –menos EE.UU.–, de lo cual es un ejemplo la reunión que convocó en Viña del Mar en el mes de Abril de 2017 (Azzopardi, 2017). Todo esto puede, a su vez, llevar a una vinculación de los miembros de la AP al *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) que China se encuentra liderando. En ese



sentido, Chile y Perú ya han manifestado su interés en participar en tal mega-bloque comercial (Cech, 2016).

En cuanto al escenario interamericano, del mismo modo que se describió en el apartado anterior con respecto a lo global, Colombia está proyectando una imagen más activa y propositiva. Así las cosas, “uno de los roles que le ha interesado jugar a Colombia es el de proyectarse como país puente entre diversos referentes geográficos, bloques ideológicos e intereses” (Pastrana, 2014, p. 90). Un ejemplo de ese rol de país puente puede identificarse en la VI Cumbre de las Américas llevada a cabo en Cartagena (2012), en la que Colombia abogó por la participación de Cuba, a fin de facilitar un acercamiento con EE.UU., el cual finalmente no se logró en ese momento, pero que permitió reafirmar el rechazo de los países de ALC frente a tal exclusión. Asimismo, Colombia ha manifestado sus intenciones de ser el país que gestione unas relaciones más estrechas entre los EE.UU. y los países e instituciones suramericanas (Ortiz, 2012).

En la Cumbre de las Américas de 2015 realizada en Panamá, el presidente Santos realizó diversas propuestas entre las que se destacó la de gestionar la creación de un Sistema Interamericano de Educación. Aunque es difícil concebir que se llegue a impulsar en todos los Estados un mismo modelo educativo, dada la diversidad ideológica presente en el continente, a lo que apunta la propuesta es a cooperar y acompañar a los países americanos en la formulación e implementación de mejores políticas públicas en educación. Así como también, enfocado a la promoción de aumentos por parte de los Estados miembros en la inversión en ciencia y tecnología. Aunado a lo anterior, el presidente Santos considera que la educación puede convertirse en la herramienta fundamental combatir la inequidad y la desigualdad presentes en el continente. Con respecto a la materialización de dicho Sistema de Educación se ha señalado que funcionaría en el seno de la OEA y tendría el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Mundial (Semana, 2015).

En adición a las relaciones y escenarios regionales que serán estratégicos para la política exterior colombiana del posconflicto, es importante destacar también la proyección de liderazgo que pretenda desplegar Colombia por medio del refuerzo de su rol de oferente de cooperación en la región centroamericana y en especial en el Triángulo del Norte –Honduras, el Salvador y Guatemala. Este tipo de cooperación es realizada en forma triangular donde EE.UU. financia y Colombia aporta el *know how* en cuestiones de seguridad como la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales, así como a través de cooperación Sur-Sur (Tickner, 2014). Dentro de estas actividades están: la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica y la Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral de Colombia

Los Retos de la Implementación

La refrendación de un nuevo Acuerdo de Paz a través del Congreso de la República, y la declaración de su constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, ambas a finales de 2016, marcaron la entrada en vigencia de los pactos negociados entre el gobierno de Colombia y las FARC, y dieron comienzo a una nueva etapa: la de la implementación. La ejecución de los acuerdos de paz se enfrenta numerosos desafíos de tipo jurídico, político, económico, social, en cuestiones de seguridad, entre otros, que pueden dificultar o potenciar la proyección internacional del país.

En tal sentido, la implementación de los acuerdos tiene retos de tipo jurídico, en especial, en cuanto a los imperativos de la justicia transicional (verdad, justicia y reparación), que se deben realizar con particular cuidado y atención a los estándares internacionales. Por lo tanto, es fundamental lograr imponer sanciones efectivas, lo cual no implica pena privativa de la libertad necesariamente. Se ha contemplado en el acuerdo de paz sanciones alternativas desde una perspectiva de justicia restaurativa, lo que puede implementarse conforme a las obligaciones internacionales de justicia. Sin embargo, es imperativo que se constituyan como verdaderas sanciones que evidencien la censura a la



conducta criminal porque la percepción de impunidad activaría la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo cual sería un escenario sumamente negativo para la legitimidad internacional de los acuerdos de paz.

El gobierno del Presidente Santos debe garantizar y crear las condiciones necesarias para la construcción de una verdad que trascienda lo judicial, es decir, la configuración de una Comisión de la Verdad con herramientas que permitan la búsqueda de una verdad que le visibiliza a lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno. Además, permitir que los diferentes actores sociales generen desde su perceptiva una memoria institucional. Empero, en cualquier caso se debe tanto desde la verdad como de la justicia orientar todos los esfuerzos políticos y administrativos a la satisfacción de los derechos de las víctimas. De tal modo que desde una visión integral se logre una implementación de los acuerdos de paz en atención con lo dispuesto por los estándares internacionales sobre la materia.

Por su parte, uno de los retos políticos más importantes para garantizar la defensa y prevalencia de los acuerdos será dar manejo a la polarización política y social en que se sumió al país por la convocatoria al plebiscito, que pretendía dar ‘refrendación popular’ a lo acordado en la Habana. En dicho plebiscito, el 2 de octubre de 2016 triunfó el No a los acuerdos de manera sorpresiva y por un estrecho margen, con alrededor del 50,23% de los votos con un 49,76% de votos por el Sí (El Tiempo, 2016). Diversos factores influyeron en tal victoria: una campaña débil y con poca pedagogía del contenido de los acuerdos del gobierno y los partidarios del Sí, la baja popularidad de Santos -agravada por un momento difícil para la economía nacional-, la manipulación y desinformación que promovieron los que dirigieron la campaña del No⁸ para generar indignación en la población, entre otros elementos.

La victoria de los partidarios del No, llevó a que se diera una renegociación de los Acuerdos entre las FARC y el gobierno, tras lo cual fueron refrendados, ya no por medio de una votación popular, sino a través de un Acto Legislativo emitido por el Congreso colombiano. Acto que también autorizó la utilización del *fast-track*⁹ para realizar más ágilmente la implementación de los acuerdos por la vía legislativa. A pesar de esa renegociación, muchos de quienes hicieron campaña por el No, consideran que sus objeciones no fueron incorporadas en el documento final, por lo que han planteado su tajante oposición y han señalado que, de llegar al poder en las elecciones presidenciales de 2018, buscaran una “revisión” de los acuerdos de paz.

Este panorama genera obstáculos en cuanto a la construcción de un consenso político absoluto en torno a la paz, pero debe destacarse que son mayoritarios los partidos políticos y movimientos sociales que se encuentran a favor de los acuerdos, y que planean defenderlos e incluso formar coaliciones para hacerlo de cara a las elecciones del 2018. De hecho, el único que se opone a los mismos es el partido Centro Democrático, fundado por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez.

Otro de los retos domésticos son las negociaciones de paz que han sido iniciadas con la segunda guerrilla más grande de Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya mesa fue instalada el 7 de febrero de 2017, y que ha tenido diversos contratiempos debidos, en especial, a la continuidad de sus actividades delictivas en medio de las negociaciones. Sin embargo, el país no sólo se enfrenta al desafío de

9 El fast track es un mecanismo legislativo que permite una aprobación más ágil de las leyes y reformas constitucionales necesarias para implementar los acuerdos de paz. Permitiendo que: 1. Se aprueben en tres debates las normas que tomarían entre cuatro u ocho debates (dependiendo del tipo de norma) según lo establece la constitución; 2. Se pueda aprobar ‘en bloque’ cada ley para implementar los acuerdos, esto es, que no tenga que votarse artículo por artículo como está señalado en la constitución; y 3. Qué no se pudiera modificar lo pactado por el gobierno colombiano y las FARC en los acuerdos sin autorización del Ejecutivo (Semana, 2017). Estos dos últimos puntos fueron declarados inconstitucionales posteriormente, en atención a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el senador del Centro Democrático Iván Duque (Noticias Caracol, 2017), por lo que el acuerdo deberá votarse punto por punto y podrá incluir modificaciones del Congreso, lo que podría ralentizar la implementación del mismo y podrían introducirse cambios de fondo. Sin embargo, la realización de tales cambios es bastante improbable teniendo en cuenta las mayorías legislativas multipartidistas que respaldan el acuerdo pactado en La Habana.

8 Las cuales fueron reveladas con numerosos detalles por el gerente de la campaña por el No -Juan Carlos Vélez-, a quien sin embargo contradijeron los miembros de su partido (El País, 6 de Octubre de 2016). Con base en sus declaraciones, la Fiscalía se encuentra realizando una investigación, debido a que ante ésta se presentó una denuncia que señala que quienes participaron en los actos por él descritos incurrieron en el delito de fraude al sufragante (El Espectador, 6 de Octubre de 2016). Asimismo se inició una investigación por estos mismos hechos en el Consejo Nacional Electoral (Caracol, 19 de Octubre de 2016).



negociar e implementar la paz con estas guerrillas, asimismo debe contrarrestar las amenazas a la seguridad que representan las numerosas bandas criminales que vienen emergiendo, algunos de cuyos miembros integraron otros grupos armados en el pasado. Ese tipo de grupos se suman a los obstáculos para el combate al narcotráfico, que es uno de los grandes problemas que el Estado colombiano viene enfrentando desde hace décadas, y que es un fenómeno que después de alcanzar un bajo histórico en 2012, ha tenido un aumento en el número de hectáreas de coca cultivadas desde entonces (Observatorio de Drogas de Colombia, 2016).

Igualmente, se viene presentando un asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entre el primero de enero de 2016 y el primero de marzo de 2017 se registraron 156 homicidios contra estos líderes (El País, 2017). Tal escenario dificulta la confianza tanto de las FARC como del ELN en una implementación de los acuerdos que les permita dar su paso a la vida política sin temor a ser exterminados como ocurrió con los miembros de la Unión Patriótica. Lo anterior se suma a las dificultades que ha enfrentado el proceso de restitución de tierras en aquellas regiones donde todavía falta consolidar la presencia del Estado y garantizar la seguridad. Evitar esos asesinatos sistemáticos también se presenta como un imperativo para cumplir con la implementación de los acuerdos, que se encuentran verificando las Naciones Unidas y la CELAC.

Del mismo modo, se presentan retos para la economía del país, dado que el crecimiento ha disminuido como consecuencia de los bajos precios del petróleo y de las materias primas, así como de la reducción de las compras chinas. Tal situación pone de presente la necesidad de transformar de manera decisiva el aparato productivo del país para agregar valor a los productos de su canasta exportadora, lo cual puede realizarse a través de la generación de cadenas de valor regional y por medio de la negociación de acuerdos de comercio que consideren tal situación. Aquí también hay un reto en cuanto a la implementación de los acuerdos en lo relativo al desarrollo agrario integral, que fue acordado con las

FARC y que además hace parte de las exigencias de la OCDE para el ingreso como miembro del Estado colombiano.

Conclusiones

Desde hace varias décadas, la proyección exterior de Colombia ha estado profundamente conectada a las dinámicas del conflicto y de la lucha contra el narcotráfico, en especial debido al proceso de securitización de la política externa e interna. Tal situación se vio exacerbada durante el gobierno de Andrés Pastrana y aún más durante el de Álvaro Uribe, lo que produjo un aislamiento regional como consecuencia, entre otros elementos, de la percepción de amenaza que generó el Plan Colombia en los países vecinos -además de los impactos negativos del efecto *spill-over* del conflicto armado-. Asimismo, se generó una *terrorización* y una *narcotización* de la política exterior, donde ambos temas pasarían a ocupar el primer puesto de las prioridades de la agenda internacional.

Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, la política exterior fue empleada como una herramienta para gestar el proceso de paz con las FARC, y posteriormente para dotarlo de legitimidad internacional. A la vez que se convirtió en parte de los elementos estratégicos para lograr apoyos técnicos y financieros necesarios para una etapa de posconflicto. Por otro lado, la administración de Santos también propugnó por una diversificación geográfica y temática de la política exterior que han promovido una reaproximación de los países de la región, y una mayor proyección hacia Asia y África. Al tiempo que se buscó desnarcotizar y desterrorizar la agenda, a través de la promoción de nuevos temas como el medio ambiente, el rol de Colombia como oferente de seguridad, la educación, entre otros.

En las instituciones globales, Colombia busca proyectarse como un país mucho más activo, propositivo y autónomo, a través de la promoción de un debate global sobre el tema de las drogas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU, por medio de la suscripción de convenios de cooperación



con la OTAN, y a través de su aplicación para ingresar a la OCDE. Del mismo modo, busca vincularse a las negociaciones de los mega-bloques comerciales que se encuentran impulsándose en Asia y América Latina. En ese contexto, el Estado colombiano también quiere aportar al mundo el know-how en seguridad que quedó de los años del conflicto y de la lucha contra las drogas.

En cuanto a sus socios globales, Colombia cuenta con el apoyo de los EE.UU. para el posconflicto, incluso en la era Trump, aunque está por definirse si él brindará todo el paquete de ayudas del plan “Paz Colombia”, que había prometido su predecesor. No obstante, se prevé que los temas de cooperación tradicionales como el narcotráfico mantendrán un lugar fundamental en la agenda debido a que hace parte de los puntos negociados en la Habana, y también de las prioridades de la agenda del presidente estadounidense. Colombia cuenta, a su vez, con el apoyo de la Unión Europea quien está contribuyendo con asistencia técnica y financiera, tanto desde la organización como a nivel bilateral con países como Alemania, España y Francia. Por otro lado, la cooperación con los países asiáticos empieza a tener un papel en la construcción del posconflicto, principalmente por la ayuda que están brindando países como Japón, Corea del Sur y China.

En el panorama regional, la diversificación geográfica logró una aproximación a Estados de la región y a las instituciones de la gobernanza regional, quienes brindaron su apoyo al proceso de paz y su cooperación para el posconflicto en agendas fundamentales como el cuidado de las fronteras en el caso de Brasil y Ecuador. A su vez, la mayor convergencia que se ha dado en cuestiones económicas dado el giro a la derecha en Brasil y Argentina, puede contribuir al acercamiento de bloques económicos como la AP y el MERCOSUR. En particular, en un contexto en el que los países latinoamericanos y asiáticos buscan opciones tras la encrucijada para el TPP que representa la salida de EE.UU. del acuerdo. Sin embargo, el deterioro de la situación venezolana ha minado el clima de buenas relaciones que se construyeron a la llegada de Santos con el vecino país. Ante fenómenos como los cierres

unilaterales de las fronteras y la posibilidad de una compleja situación humanitaria derivada del proceso de migración de venezolanos a Colombia, se puede afirmar que el desenlace de la crisis económica y política de Venezuela tendrá impactos en el posconflicto colombiano en cuestiones como la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales y el cuidado de las fronteras, entre otros retos.

Finalmente, en el panorama doméstico se observan desafíos jurídicos, económicos, políticos, y sociales que deben ser abordados de cara a la implementación de los acuerdos de paz y al fortalecimiento de la proyección exterior de Colombia. Entre los que vale la pena destacar: el asesinato sistemático de líderes sociales, la polarización política en torno al tema de la paz, las negociaciones con el ELN y la emergencia o reforzamiento de las bandas criminales y sus vínculos con el narcotráfico, el desarrollo de la justicia transicional, la compleja situación económica del país y la necesidad de transformación de su aparato productivo, así como la reforma agraria integral que es al mismo tiempo un punto de los acuerdos de la Habana y parte de la agenda de ingreso a la OCDE. Todos estos aspectos son retos que enfrenta el país para entorpecer o consolidar su nueva proyección internacional y construir una paz estable y duradera.

Referencias Bibliográficas:

- Azzopardi, T. (22 de febrero de 2017). China, Japan, South Korea to Attend Post-TTP Summit. Bloomberg. Recuperado de <https://www.bna.com/china-japan-south-n57982084182/>
- Betancourt, R. (2015). Los organismos hemisféricos y regionales en el posconflicto colombiano. En E. Pastrana y H. Gehring (Eds.), Política Exterior Colombia: Escenarios y Desafíos en el Posconflicto (pp. 317-344). Bogotá, Colombia: Editorial Javeriana.
- Lozano, G. (18 de octubre de 2016). Japón dona cerca de 11.5 millones de dólares para desminado en Colombia. BluRadio. Recuperado de <http://www.bluradio.com/paz/japon-dona-cerca-de-115-millones-de-dolares-para-desminado-en-colombia-119853>



- Borda, S. (2007). La internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre: ¿la ejecución de una estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de lo inevitable? *Revista Colombia Internacional*, 65, 66 – 89.
- Borda, S. (noviembre, 2014). Política exterior de la Administración Santos: un liderazgo de vía media para Colombia. *Barcelona Centre for International Affairs*, 29-39. Recuperado de [https://www.cidob.org/es/articulos/monografias/liderazgos regionales emergentes en america latina/politica exterior de la administracion santos un liderazgo de via media para colombia](https://www.cidob.org/es/articulos/monografias/liderazgos_regionales_emergentes_en_america_latina/politica_exterior_de_la_administracion_santos_un_liderazgo_de_via_media_para_colombia)
- Cardona, D. (2001). La política exterior de la administración Pastrana (1998-2002) hacia una evaluación preliminar. *Colombia Internacional*, 53(3), 53–74. Recuperado de <http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/>
- Castro, R. y González, P. (2015). Las organizaciones de la arquitectura global y el posconflicto colombiano: el caso de la cooperación de la ONU, el Banco Mundial y la OCDE. En E. Pastrana y H. Gehring (Eds.), *Política Exterior Colombia: Escenarios y Desafíos en el Posconflicto* (pp. 293-315). Bogotá, Colombia: Editorial Javeriana.
- Cech, A. (diciembre 2016). China's Pivot to Latin America. *Expatt Magazine*. Recuperado de <https://expattmagazine.wordpress.com/2016/12/05/chinas-pivot-to-latin-america/>
- Dinatale, D. (2016). Mauricio Macri aseguró que el MERCOSUR debe “salir del congelamiento” para ir a un acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico. *La Nación*. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/1914081-mauricio-macri-aseguro-que-el-MERCOSUR-debe-salir-del-descongelamiento-para-ir-a-un-acuerdo-de-libre-comercio-con-la-alianza-del-pacifico>
- El Tiempo. (30 de Marzo de 2017). En Cifras: La Inmigración de Venezolanos a Colombia. *El Tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/la-inmigracion-de-venezolanos-a-colombia-en-cifras-73006>
- El Tiempo. (12 de Febrero de 2017). Por teléfono, Trump invitó a Santos a la Casa Blanca. *El tiempo*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/presidente-santos-habla-por-telefono-con-trump-56929>
- EuropaPress. (2017). Lenin Moreno ratifica el apoyo de Ecuador a Colombia para firmar la paz con el ELN. *Europa Press*. Recuperado de <http://www.europapress.es/internacional/noticia-lenin-moreno-ratifica-apoyo-ecuador-colombia-firmar-paz-eln-20170509142651.html>
- Flandes, D. (2012). La política exterior colombiana desde la perspectiva del realismo neoclásico. En S. Jost (Ed.), *Colombia: ¿una potencia en desarrollo? Escenarios y desafíos para su política exterior* (pp. 19-37). Bogotá, Colombia: Opciones Gráficas Editores Ltda.
- Gehring, H. y Cuervo, M. (2015). El camino de Colombia hacia la OCDE: ¿un catalizador de medidas domésticas favorables para el posconflicto? En E. Pastrana y H. Gehring (Eds.), *Política Exterior Colombia: Escenarios y Desafíos en el Posconflicto* (pp. 651-686). Bogotá, Colombia: Editorial Javeriana.
- Globovisión. (27 de Diciembre de 2016). En Claves: El acuerdo entre la OTAN y Colombia. *Globovisión*. Recuperado de <http://globovision.com/article/en-claves-el-posible-acuerdo-entre-la-otan-y-colombia>
- Hough, P. (2004). Security and Securitization. En P. Hough (Ed.), *Understanding Global Security* (pp. 1-20). Oxon, England: Routledge.
- Las VocesDel Mundo (2017). Trump reafirmó a Santos su apoyo en la lucha contra las drogas. *Las Voces del Mundo*. Recuperado de: <http://es.rfi.fr/americas/20170519-trump-reafirmo-santos-su-apoyo-en-la-luchar-contra-las-drogas>
- Márquez, M. (2015). Colombia, Venezuela y Ecuador: cooperación y coexistencia de cara al posacuerdo. En E. Pastrana y H. Gehring (Eds.), *Política Exterior Colombia: Escenarios y Desafíos en el Posconflicto* (pp. 539-566). Bogotá, Colombia: Editorial Javeriana.
- Noticias Caracol (2017). Corte Constitucional tumba varios puntos del fast track, ¿cuáles son? *Noticias*



Caracol. Recuperado de: <http://noticias.caracol.tv.com/el-acuerdo-final-paz-en-colombia/corte-constitucional-tumba-varios-puntos-del-fast-track-cuales-son>

- Ordoñez, F. (09 de mayo de 2017). Rubio backs 'Peace Colombia' aid, says now is not time for U.S. to disengage. Miami Herald. Recuperado de <http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/article149615294.html>
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (s.f.). Estrategia de cooperación internacional en seguridad integral de Colombia. Recuperado de http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/politica_exterior/estrategia_de_seguridad_integral.pdf
- Noticias RCN (21 de Mayo de 2015). China donará USD\$ 8 millones para el posconflicto en Colombia. Noticias RCN. Recuperado de <http://www.noticias-rcn.com/nacional-pais/china-donara-usd-8-millones-el-posconflicto-colombia>
- Observatorio de Drogas de Colombia. (2016). Estadísticas nacionales. Recuperado de <http://www.odc.gov.co/sidco/perfiles/estadisticas-nacionales>.
- Ortiz, F. (2012). Colombia quiere ser un país puente entre las Américas”: coordinador de Cumbre. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/colombia-quiere-ser-pais-puente-entre-americas-organizador-del-evento>
- Pastrana, E. (2011). Evolución y Perspectivas de las Relaciones entre Colombia y Brasil. En Sorj, B. y Fausto, S. (compiladores), Brasil y América del Sur: Miradas Cruzadas (pp. 75-116). Buenos Aires, Argentina: Catálogos.
- Pastrana, E. (2014). Colombia de cara a una multipolaridad creciente y el auge del Asia Pacífico. En Tremolada, E. (Ed.), Colombia en el sistema internacional: su proyección en Asia (pp. 79-114). Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Pastrana, E., Betancourt, R. y Castro, R. (2014). Colombia y la Alianza del Pacífico: un proyecto regional de cara a la multipolaridad creciente. En E. Pastrana y H. Gehring (Eds.), Alianza del Pacífico. Mitos y Realidades (pp. 173-205). Bogotá, Colombia: Editorial Javeriana.
- Pastrana, E., Castro, R. y González, P. (2017). Las Relaciones entre Colombia y China: Perspectivas para una Asociación Estratégica, Comprensiva e Integral. En E. Pastrana y H. Gehring (Eds.), La Proyección de China en América Latina y el Caribe (pp. 409-445). Bogotá, Colombia: Editorial Javeriana.
- Pastrana, E. y Gehring, H. (2017). La Política Exterior Colombiana de cara al Posconflicto. Working Paper. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer.
- Pastrana, E. y Vera, D. (2012a). De Uribe a Santos: ¿continuidad o nueva orientación de la política exterior colombiana? En S. Jost (Ed.), Colombia: ¿una potencia en desarrollo? Escenarios y desafíos para su política exterior (pp. 57-76). Bogotá, Colombia: Opciones Gráficas Editores Ltda.
- Pastrana, E. y Vera, D. (2012b). Estrategias de la política exterior de Colombia en su calidad de potencia secundaria de Suramérica. En E. Pastrana, S. Jost y D. Flandes (Eds.), Colombia y Brasil: ¿socios estratégicos en la construcción de Suramérica? (pp. 187-235). Bogotá, Colombia: Konrad Adenauer Stiftung. GIGA. Universidad Javeriana.
- Rodríguez, H. (2016). El libre comercio con los coreanos ahora sí se viene con todo. El Tiempo. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/mundo/asia/tratado-de-libre-comercio-con-corea-del-sur/16644361>
- Rodríguez, M. (09 de febrero de 2017). Is Pink Latin America Embracing Free Trade? The World Weekly. Recuperado de <http://www.theworldweekly.com/reader/view/magazine/2017-02-09/is-pink-latin-america-embracing-free-trade/9699>
- Saint-Pierre, H. (2012). Fundamentos para pensar la distinción entre “defensa” y “seguridad”. En M. Donaldio y M. Tibiletti (Coords.), Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe (pp. 42-46). Buenos Aires, Argentina: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL).
- Semana (03 de febrero de 2015). Santos: el Papel de Cuba en el proceso de paz ayudó a deshielo con EE.UU. Semana. Recuperado de <http://www.semana.com>



com/mundo/articulo/santos-papel-de-cuba-en-proceso-de-paz-ayudo-deshielo-con-ee-uu/419648-3

- Semana (2017). ¿Qué es el ‘fast track’?. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/fast-track-que-es-y-por-que-es-importante/509302>
- TheWhiteHouse. (2017). Remarks by President Trump and President Santos of Colombia in Joint Press Conference. The White House. Recuperado de: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/18/remarks-president-trump-and-president-santos-colombia-joint-press>
- Tokatlian, J. (2008). La construcción de un “Estado fallido” en la política mundial: el caso de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Análisis político, 64(3), 67-104. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v21n64/v21n64a05.pdf>
- Tickner, A. (2004). La securitización de la crisis colombiana: bases conceptuales y tendencias generales. Revista Colombia Internacional, 60(2), 12-35. Recuperado de <https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/439/1.php>
- Tickner, A. (2007). Intervención por invitación, claves de la política exterior colombiana y de sus debilidades principales. Revista Colombia Internacional, 65(1), 90-111. Recuperado de <https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/93/view.php>
- Tickner, A. (2014). Colombia, Estados Unidos y la cooperación en seguridad. Centro de Investigación del crimen organizado (InSight Crime). Recuperado de <http://es.insightcrime.org/analisis/colombia-estados-unidos-y-la-cooperacion-en-seguridad-regional>
- Vázquez, A. (1996). La amistad de Colombia y los Estados. Relatos de historia diplomática de Colombia, siglo XX (tomo II) (pp. 273-323). Bogotá, Colombia: Cancillería de San Carlos; Centro Editorial Javeriano.